

Editorial

En estos últimos años hemos asistido, para nuestro beneplácito, al debate de un modelo de país que puede producir más y mejores beneficios para las grandes mayorías. Cabe recordar que las teorías formuladas durante los años noventa hablaban de una concentración de la riqueza en algunos sectores en particular, como los de producción primaria –clásicos fragmentos del poder–, cuyo excedente llegaría a los sectores más postergados por efecto *derrame*. Las pruebas demuestran que tal derrame no se produjo y que amplísimas fracciones de nuestra sociedad quedaron excluidas no solo de las riquezas obtenidas por los sectores de producción primaria, sino, también, de los mínimos beneficios y de los derechos más elementales.

Proponer un modelo económico mixto implicó desafiar el modelo liberal de los noventa y soportar la embestida de los poderes concentrados que veían sus intereses en riesgo. Al mismo tiempo, implicó planificar y organizar políticas que generaran una reversión de ese modelo a través de la intervención del Estado, ya sea como contralor de las actividades económicas o como inversor directo en planes de financiación de actividades industriales o de agregado de valor. El Estado activo también intervino en la recuperación de empresas argentinas que habían sido privatizadas, como Aerolíneas Argentinas, las AFJP, YPF, etcétera; en la inversión en obras públicas, como la recuperación de las rutas o de los ferrocarriles; en proyectos científico-tecnológicos, como el ARSAT 1; e, indirectamente, en la financiación de programas de créditos para viviendas o para automóviles, como el pro.cre.ar o el pro.cre.auto, el programa Ahora 12, y en las medidas de inclusión social, como la Asignación Universal por Hijo o el pro.gre.sar, todas disposiciones tendientes a aumentar el consumo y la circulación de dinero y, así, fomentar la producción y el empleo.

Las políticas de estado de promoción industrial implementadas a partir de 2003, como los programas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, del Ministerio de Trabajo y de Industria, de Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación de la Nación o las capacitaciones del Ministerio de Desarrollo Social, por citar solo algunas, significaron, por un lado, una decidida vocación de un Estado presente a través del control del mercado –como política opuesta a la década de los noventa–, y por otro, la reindustrialización, que genera dos beneficios: la recuperación de otras fuentes de puestos de trabajo y de ingresos, y además, una estrategia de reconstrucción de la autoestima de los argentinos. Este último es, quizás, el aspecto menos tangible pero que, sin dudas, tiene el significado político y social más profundo: un pueblo confiado que exhibe orgulloso sus logros y su crecimiento no puede ser fácilmente dominado.

Radica aquí la doble importancia de este proceso de industrialización. En un primer aspecto, una economía mixta, de producción primaria agroexportadora y, también, de producción con valor agregado y con resultados directos sobre la economía, y, en un segundo aspecto, la recuperación del *ser nacional*, con un importante efecto en la valoración de las capacidades vernáculos y sus consecuencias en la construcción de políticas inclusivas y de crecimiento a futuro, es decir, el germen de un renovado paradigma que recupera valores de raigambre nacional y popular.

Además de ello, este esquema ofrece, sin dudas, más y mejores condiciones y oportunidades de trabajo, ya que requiere de mayor cantidad de mano de obra calificada tanto para nuevas prácticas de oficios emergentes de nuevas tecnologías como para las tradicionales. En estos últimos doce años, el índice

de desocupación pasó del 25% al 6,8%, es decir, se generaron 6 millones de nuevos puestos de trabajo a partir de estas políticas de estado.

El rol del diseño en este proyecto no fue menor y esta realidad fue comprendida y alentada desde el propio Estado, que introdujo la variable *diseño* como parte de la estrategia productiva, que reconoció explícitamente las áreas en las que interviene directa e indirectamente y que hizo foco en la sustitución de importaciones, en la organización del trabajo, en la innovación tecnológica, en el rescate de fábricas recuperadas, en la capacitación profesional para quienes asuman nuevos empleos, en el apoyo al nacimiento y al crecimiento de microemprendimientos y de pymes y, fundamentalmente, en el desarrollo de actividades productivas de raigambre local vinculado a las técnicas empleadas, a los productos emergentes del estudio la comunidad de usuarios que, más allá de la escala productiva en sí, constituyen verdaderas unidades económicas y contribuyen a la construcción de la identidad nacional.

Esta es, tal vez, la contribución más profunda y de más largo alcance en la conciencia colectiva en estos últimos diez años: *sabernos* capaces de producir, de hacer, de proponer y de innovar; es decir, capaces de decidir acertadamente y con éxito nuestro destino contando con los elementos necesarios: la financiación, los complementos logísticos estratégicos (medios de transporte, asesoramiento, capacidad y medios para las prácticas asociativas regionales, etcétera) y, fundamentalmente, a partir de la decisión de una nación decidida a crecer y a ocupar el lugar que merece en el mundo, la de un país libre, justo y soberano.

DI Ana Bocos
Directora de *Tableros*